



RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

CONTROL DE ARMAS DE FUEGO

Boletín 12229-02



RESEÑA LEGISLATIVA
es una publicación de LIBERTAD Y DESARROLLO

DIRECTOR RESPONSABLE:

Luis Larraín A.

EDITOR: Pablo Kangiser G.

DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago, Chile.

1363
20 DICIEMBRE 2018

RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

1363

20 DICIEMBRE 2018

CONTROL DE ARMAS DE FUEGO

Boletín 12229-02

ÍNDICE

I DESCRIPCIÓN	3
II OPINIÓN EJECUTIVA	4
III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	6
IV COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	9
V COMENTARIOS ESPECÍFICOS	13
VI HIPERVÍNCULO AL PROYECTO DE LEY	25
VII ANEXO	26

I DESCRIPCIÓN

BOLETÍN 12229-02

CONTROL DE ARMAS DE FUEGO

REFERENCIA

Establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a ésta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía.

INICIATIVA

Mensaje presidencial

ORIGEN

Senado

MINISTERIOS

Del Interior y Seguridad Pública y de Defensa

INGRESO

22 de noviembre de 2018

ARTICULADO

Artículo único, que introduce los nuevos artículos 29 a 34 en la Ley de Control de Armas, y tres artículos transitorios

II OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

CONTROL DE
ARMAS DE FUEGO

EL PROYECTO QUE AHORA SE ANALIZA FORMA PARTE DE LA AGENDA DE SEGURIDAD ELABORADA EN LA MESA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL GOBIERNO PARA ABORDAR ESTA PRIORITARIA MATERIA. EN PARTICULAR, LA INICIATIVA SE CENTRA EN UNO DE LOS VARIOS ASPECTOS INVOLUCRADOS: EL QUE TIENE RELACIÓN CON EL USO DE LAS ARMAS.

Más allá de las variaciones que presentan las encuestas de percepción de delincuencia y victimización, que se pueden deber a múltiples factores, lo cierto es que se hace necesario combatir el delito desde todos los ángulos que inciden en este complejo problema. El proyecto que ahora se analiza forma parte de la Agenda de Seguridad elaborada en la mesa de trabajo convocada por el gobierno del Presidente Piñera para abordar esta materia prioritaria. En particular, la iniciativa se centra en uno de los varios aspectos involucrados: el que tiene relación con el uso de las armas. Lo anterior, en un contexto legislativo en el cual el gobierno ahora ha presentado una serie de otras iniciativas legales recientes, tendientes a fortalecer la coordinación de las policías, la probidad y transparencia en las fuerzas de orden y seguridad, a fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia y robustecer el rol de los municipios en materia de seguridad. Lo precedentemente expuesto es sin perjuicio de las medidas administrativas que, además, se están adoptando al efecto.

El mayor control que propone el proyecto es en general una medida recomendable dado el alto nivel de violencia y peligrosidad con que suelen actuar los delincuentes. Ahora bien, no todas las medidas que se proponen en el proyecto de ley merecen la misma calificación. Respecto a disminuir la cantidad de armas en circulación mediante la entrega voluntaria por parte de sus poseedores o tenedores, es una medida que difícilmente será ejercida por los delincuentes, para los

cuales un arma viene a ser una “herramienta de trabajo”. Los ciudadanos honestos probablemente sí lo hagan y, de hecho, un programa informal de Carabineros ya ha recaudado numerosas armas de fuego, lo que podría continuarse sin ser necesaria una regulación legal.

Otra medida es la reinscripción obligatoria de las armas dentro de seis meses, lo que si bien constituye una medida de control positiva, podría generar atochamiento (hay unas 750 mil armas inscritas o más), a menos que se den facilidades para proceder mediante sistemas computacionales, lo cual no se contempla expresamente en el proyecto de ley.

La tercera medida es una amnistía para infractores de la ley de control de armas, los que podrán individualizar el arma en una plataforma virtual, manteniéndose ellos en el anonimato. Pero en este caso el proyecto no resulta todo lo preciso que se desearía, pues señala que otorga amnistía por seis meses, en circunstancias que, legalmente, la amnistía se otorga indefinidamente, pues supone la extinción de la responsabilidad penal de ahora en adelante.

En general, se podría hacer el esfuerzo de eliminar aspectos del proyecto de ley que podrían quedar regulados por normas administrativas. Respecto de las materias propias de ley, como la fiscalización de las armas y materias afines, sería necesario una mayor precisión, lo que redundaría en una mejor aplicación de la ley.

OTRA MEDIDA ES LA REINSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE LAS ARMAS DENTRO DE SEIS MESES, LO QUE SI BIEN CONSTITUYE UNA MEDIDA DE CONTROL POSITIVA, PODRÍA GENERAR ATOCHAMIENTO (HAY UNAS 750 MIL ARMAS INSCRITAS O MÁS), A MENOS QUE SE DEN FACILIDADES PARA PROCEDER MEDIANTE SISTEMAS COMPUTACIONALES, LO CUAL NO SE CONTEMPLA EXPRESAMENTE EN EL PROYECTO DE LEY.

III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

CONTROL DE ARMAS DE FUEGO

Este proyecto de ley forma parte de la Agenda de Seguridad propuesta y anunciada por el gobierno. En este caso se trata de modificaciones a la Ley de Control de Armas de Fuego para introducir, en síntesis, las siguientes nuevas materias: a) la entrega voluntaria de armas por parte de sus poseedores o tenedores; b) la obligación -para quienes no materializaren la entrega voluntaria- de reinscribir sus armas, fijando un plazo para ello; c) amnistía para aquellos poseedores o tenedores de armas de fuego irregulares, para que, dentro del plazo que se les fije, puedan entregarlas voluntariamente o solicitar su inscripción, según corresponda; d) imputar el mayor gasto que demande la ejecución de este proyecto aprobado como ley, y; e) establecer su vigencia diferida.

a) Entrega voluntaria de armas de fuego

La Dirección General de Movilización Nacional establecerá una plataforma virtual en la que se indicarán las unidades de las FF.AA., de Carabineros o Investigaciones donde se podrá efectuar la entrega de armas por parte de sus poseedores o tenedores inscritos o por sus sucesores, en su caso. El interesado se identificará, indicará su domicilio y acompañará una foto con su cédula de identidad y el número de inscripción del arma. Si la devolución la hiciere el heredero, acompañará el certificado de defunción y los documentos que acrediten el parentesco.

A continuación, la plataforma extenderá una guía de libre tránsito, válida por cinco días, para el traslado del arma hasta la unidad indicada por el interesado. Si no concurriere dentro de dicho plazo, tendrá 15 días para presentar una justificación ante la Dirección General de

Movilización Nacional. Habrá un registro de guías de libre tránsito.

Se sanciona con pena de 3 años y un día a 10 años la falsificación maliciosa de una guía de libre tránsito; y con pena de 3 años y un día a 5 años, su utilización maliciosa.

Las armas entregadas voluntariamente serán objeto de un registro y se entregará al Ministerio Público información trimestral de dichas armas, las que serán sometidas a un examen balístico de datos IBIS (por su sigla en inglés), esto es, que se almacenarán las imágenes identificatorias de los proyectiles disparados y las vainas percutadas, todo ello en conformidad al reglamento. Esta información se pondrá a disposición de los fiscales del Ministerio Público.

b) Reinscripción

Se otorga un plazo de seis meses para que todos los poseedores y tenedores inscritos en el Registro Nacional de Inscripción de Armas reinscriban sus armas de fuego. Para ello deberán realizar todos los trámites y cumplir los requisitos respectivos según las normas vigentes, excepto la revisión técnica de disparo del arma y la evaluación psíquica y física del titular. Por lo tanto, éste deberá:

- ser mayor de edad;
- tener domicilio conocido;
- presentar certificado de antecedentes de no haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva (esto es, igual o superior a 3 años y un día);
- no haber sido sancionado por violencia intrafamiliar;
- no estar formalizado o haber sido objeto de un dictamen por el fiscal militar;
- no encontrarse afecto a una medida cautelar que impida la tenencia, posesión o porte de armas de fuego;
- no habersele cancelado la inscripción de un arma de fuego dentro de los cinco años anteriores a la solicitud de reinscripción.

PARA ELLO DEBERÁN REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES Y CUMPLIR LOS REQUISITOS RESPECTIVOS SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES, EXCEPTO LA REVISIÓN TÉCNICA DE DISPARO DEL ARMA Y LA EVALUACIÓN PSÍQUICA Y FÍSICA DEL TITULAR.

c) Amnistía

La amnistía (que extingue completamente la infracción o delito), debe ser solicitada dentro del plazo de seis meses (contado en la forma que más adelante se indica), y beneficia: a poseedores o tenedores no autorizados de armas de fuego inscritas; y a poseedores o tenedores de armas de fuego no inscritas. El objeto de la amnistía (o la condición bajo la cual se otorga) es que realicen su entrega voluntaria o regularicen la inscripción a nombre del beneficiario de la amnistía, siempre que no se trate de armas robadas, hurtadas o extraviadas.

Para requerir la inscripción se deberán cumplir los requisitos generales y, además, realizar la regularización técnica de aptitud de disparo del arma.

En la misma plataforma virtual ya señalada, el solicitante de amnistía deberá ingresar, de manera previa y anónima, los datos del arma -tipo, marca, modelo y número de serie-, un archivo con su imagen o foto y señalar el lugar

donde realizará la entrega o la nueva inscripción.

A continuación, la plataforma emitirá, por una sola vez, una autorización de tránsito exclusivamente para su transporte al lugar de entrega o donde se solicitará la nueva inscripción; esta autorización tendrá una vigencia de 48 horas. Vencido este plazo sin que se hubiere producido la entrega o reinscripción, no habrá autorización para su posesión, porte o tenencia y se

A CONTINUACIÓN, LA PLATAFORMA EMITIRÁ, POR UNA SOLA VEZ, UNA AUTORIZACIÓN DE TRÁNSITO EXCLUSIVAMENTE PARA SU TRANSPORTE AL LUGAR DE ENTREGA O DONDE SE SOLICITARÁ LA NUEVA INSCRIPCIÓN; ESTA AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 48 HORAS.

aplicarán las normas generales de la ley de control de armas, especialmente en lo que concierne a la fiscalización del arma en el domicilio del poseedor o tenedor, presumiéndose cuando se impidiere su exhibición que el arma no se encuentra en el lugar declarado ante la autoridad, caso en el cual se formulará la correspondiente denuncia y aplicación, en su caso, de las penas de presidio previstas en la ley.

Vigente el plazo de 48 horas, no podrán ejercerse acciones penales o administrativas por la tenencia, posesión o porte de la respectiva arma de fuego; además,

se otorgará un certificado de haberse entregado el arma de fuego, suscrito por el personal que la hubiere recibido.

**VIGENTE EL PLAZO DE 48 HORAS,
NO PODRÁN EJERCERSE ACCIONES
PENALES O ADMINISTRATIVAS
POR LA TENENCIA, POSESIÓN O
PORTE DE LA RESPECTIVA ARMA DE
FUEGO; ADEMÁS, SE OTORGARÁ
UN CERTIFICADO DE HABERSE
ENTREGADO EL ARMA DE FUEGO,
SUSCRITO POR EL PERSONAL QUE LA
HUBIERE RECIBIDO.**

d) Mayor gasto

Se imputará a las partidas del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en lo que no quedare cubierto con ellas, a la partida del Tesoro Público.

**RESPECTO DE LA
OBLIGACIÓN DE
REINSCRIBIR LAS ARMAS
EN EL PLAZO DE SEIS
MESES, ÉSTOS SE CUENTAN
DESDE LA PUBLICACIÓN
EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA MODIFICACIÓN AL
REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTROL DE ARMAS
DE FUEGO. EN LA MISMA
FORMA SE CUENTA EL
PLAZO DE SEIS MESES
PARA BENEFICIARSE DE LA
AMNISTÍA.**

e) Vigencia

La ley entrará en vigencia luego de un mes desde la publicación en el Diario Oficial de la modificación al reglamento de la Ley de Control de Armas de Fuego.

El referido reglamento deberá dictarse dentro del plazo de cuatro meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Respecto de la obligación de reinscribir las armas en el plazo de seis meses, estos se cuentan desde la publicación en el Diario Oficial de la modificación al reglamento de la ley de control de armas de fuego. En la misma forma se cuenta el plazo de seis meses para beneficiarse de la amnistía.

IV COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

CONTROL DE
ARMAS DE FUEGO

1. Marco constitucional

Por disposición constitucional, ninguna persona o grupo podrá poseer o tener armas u otros elementos que señale una ley de quórum calificado, sin autorización otorgada conforme a dicha ley (inciso primero del artículo 103 de la Constitución Política). El inciso segundo del mismo artículo, modificado en 2011 por la Ley N° 20.503, dispuso que “una ley determinará el Ministerio o los órganos de su dependencia que ejercerán la supervigilancia y el control de las armas. Asimismo, establecerá los órganos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a dicho control”. De una posible interpretación armónica de ambos incisos del artículo 103, podría concluirse que la “ley” a que se refiere el inciso segundo tiene el mismo rango normativo de la del inciso primero, es decir, es una norma de quórum calificado. Sin embargo, no ha sido esa la decisión que adoptó el Tribunal Constitucional, pues en el fallo de control del proyecto de ley que dio origen a la Ley N° 20.813, que modificó la Ley de

Control de Armas, determinó que se trataba de normas de distinto rango jerárquico: de quórum calificado la del artículo 103, primera parte, ya que expresamente así se establecía, y ley común u ordinaria la norma posterior, que solo tenía por objeto la “ejecución, desarrollo y concreción” de lo que ya se había preceptuado con quórum calificado. En todo caso, el fallo da cuenta de controversias al respecto¹.

Por su parte, la anterior Ley N° 17.798, del 21 de octubre de 1972, sobre Control de Armas de Fuego, viene a ser también de quórum calificado por aplicación de la disposición cuarta transitoria de esta Constitución, que otorga dicho carácter a las leyes anteriores a la Constitución que hubieren sido dictadas sobre materias que, a partir de 1980, exigen un quórum especial ya sea orgánico constitucional o de quórum calificado, cual es precisamente el caso, sin perjuicio que, en el contexto del proyecto de ley, se podrían señalar algunas materias

1. Rol N° 2770-15-CPR.

que no serían de quórum calificado y que además, podrían quedar reguladas por normas de rango inferior a la ley.

El articulado vigente de la Ley N° 17.798, fijado por DS 400, de 2015, del Ministerio de Defensa Nacional, entrega a la Dirección General de Movilización Nacional la supervigilancia y control de las armas, explosivos y otros elementos similares. A esta Dirección se viene encomendando ahora la ejecución de acciones destinadas a que los particulares entreguen voluntariamente sus armas, o para que sean reinscritas las que estuvieren en su poder, y para favorecer con una amnistía a ciertos infractores, en los casos y forma que el proyecto indica.

2. Antecedentes

La primitiva Ley N° 17.798 fue considerada, según informaba la prensa de la época (1972) una ley represiva, pues impidió el libre uso o transporte de las armas, en un contexto ya entonces no exento de una polarización de fuerzas sobre la base de intereses políticos y consideraciones ideológicas.

Antes de dicha ley, cualquier persona podía poseer armas de fuego, especialmente de defensa personal o de caza y para actividades deportivas, sin requisitos especiales. Pero diversos episodios ocurridos en esos años motivaron establecer por ley el control y fiscalización de las armas de fuego. Con el tiempo, se fueron agregando otros elementos sujetos a fiscalización y se fueron precisando las atribuciones de la autoridad, así como las responsabilidades infraccionales y penales de quienes contravenían esa normativa.

La última modificación que se introdujo en su articulado fue en febrero de 2015 mediante la Ley N° 20.813. Esta ley introdujo entre las armas sujetas a fiscalización los bastones eléctricos o de electroshock, las armas hechizas o transformadas y varias otras. También se explicitó la necesidad de autorización para cualquier trámite relativo al arma de fuego, como ser llevada a

EN TODO CASO, EL PROYECTO DE LEY QUE AHORA SE ANALIZA, DE ACUERDO CON SU ARTICULADO, VERSA SOBRE ARMAS DE FUEGO SIN OTRA ESPECIFICACIÓN, POR LO QUE NO SOLO AFECTARÍA A LAS ARMAS CONVENCIONALES COMO REVÓLVERES O PISTOLAS, SINO TAMBIÉN A LOS EXPLOSIVOS, BASTONES ELÉCTRICOS Y CUALQUIER OTRA ARMA MENCIONADA EN LA LEY, TODAS LAS CUALES PODRÁN SER ENTREGADAS VOLUNTARIAMENTE A LA AUTORIDAD.

reparación o pruebas de tiro. Una medida de fiscalización muy importante fue la exigencia de acreditar, cada cinco años, las condiciones físicas o psíquicas para ser poseedor o tenedor del arma; y a objeto de la primera inscripción se exigió, entre otros nuevos requisitos, no haber sido condenado por violencia intrafamiliar.

En todo caso, el proyecto de ley que ahora se analiza, de acuerdo con su articulado, versa sobre armas de fuego sin otra especificación, por lo que no solo afectaría a las armas convencionales como revólveres o pistolas, sino también a los explosivos, bastones eléctricos y cualquier otra arma mencionada en la ley, todas las cuales podrán ser entregadas voluntariamente a la autoridad.

Sin perjuicio de los comentarios específicos que más adelante se señalan respecto de su articulado, cabe comentar globalmente algunas materias que deberían ser objeto de un detenido debate.

3. Entrega voluntaria de armas de fuego

Cabe señalar que ya existe por parte de Carabineros de Chile un programa para la entrega voluntaria, que desde el lanzamiento de la campaña en 2015 hasta agosto de 2017, ha recolectado más de 9 mil armas a nivel nacional. Este programa tiene mucha similitud con lo que ahora se viene proponiendo, por lo cual, se puede preguntar qué agrega el proyecto de ley a ese programa: de hecho, si una persona quiere desprenderse voluntariamente de un bien de su propiedad, no requiere ninguna autorización legal. La plataforma virtual a que se refiere el proyecto no importa una materia de ley específica, pues se trata de un mecanismo computacional de carácter administrativo, que solo requiere financiamiento, que bien podría otorgarse a través de la Ley de Presupuestos del sector público. Lo que sí es nuevo es la guía de libre tránsito, pero se trata de una materia que se regula administrativamente, sin necesidad de legislar sobre ello.

Pero la observación de fondo que esta iniciativa merece es la relación que se pretende que exista entre el combate a la delincuencia y la entrega de armas por parte de los titulares de la respectiva inscripción. Es probable, y el dato recién anotado lo demuestra, que algunos particulares puedan sentirse motivados a acoger favorablemente la campaña iniciada por Carabineros, por distintas razones, por ejemplo, por no tener pleno conocimiento ni práctica en el manejo del arma, de forma tal que ante una emergencia difícilmente la sabrían usar eficientemente. El argumento generalmente esgrimido, por otra parte, se refiere a que los delincuentes, al ingresar a robar en una casa, encuentran como parte del botín, el arma destinada por su dueño para defender su propiedad. Esa sería, entonces, una de las formas como las armas llegan a poder de los delincuentes y, de esa manera, se proveen de armas que las utilizarán en la comisión de delitos posteriores.

La lógica que existe detrás de esta reflexión, que parece ser compartida por los actores del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, presenta un contrasentido si se aplicara, teóricamente, a otros bienes que pueden ser objeto de robo y posterior utilización por los delincuentes,

como por ejemplo, los automóviles, que una vez en poder de los delincuentes, suelen ser empleados en asaltar bombas de bencina o cajeros automáticos. Si se lleva al extremo el argumento de la autoridad, tendríamos que aceptar que un martillo conservado en una casa particular para efectuar eventualmente alguna reparación, también podría posteriormente servir a los delincuentes para romper una vitrina y robar joyas o relojes.

Pero, aceptada la norma tal como viene propuesta, podría ser interesante agregar el caso de un joven mayor de 18 años que tuviera un arma inscrita, cuyos padres decidieran entregarla voluntariamente a la autoridad. Desde el punto de vista estrictamente legal, esa entrega no sería voluntaria por parte del titular de la inscripción y constituiría una acción ilegítima. Esta materia podría regularse a favor de preferir el mejor criterio de los padres sobre el del hijo que vive conjuntamente con ellos.

En síntesis, la entrega voluntaria de armas de fuego no debería ser una materia regulada por ley, aun cuando se aprecia con ello un esfuerzo por institucionalizar el programa vigente; y parece poco probable que fueran los delincuentes los que concurrieran, por iniciativa propia, a materializar este trámite.

PERO LA OBSERVACIÓN DE FONDO QUE ESTA INICIATIVA MERECE ES LA RELACIÓN QUE SE PRETENDE QUE EXISTA ENTRE EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA ENTREGA DE ARMAS POR PARTE DE LOS TITULARES DE LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.

4. La reinscripción

La reinscripción de armas de fuego es una eficiente medida de fiscalización siempre que se cumplan ciertos parámetros de orden práctico, como evitar la comparecencia personal del titular de la inscripción y, en cambio, permitir la utilización de la plataforma virtual. Sin embargo, el proyecto establece el uso de la plataforma para la entrega voluntaria y también para la amnistía, pero, por alguna razón que se ignora, no está habilitada para la reinscripción.

En todo caso, cabe consignar que, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Control de Armas, el Presidente de la República, a petición de la Dirección General de Movilización Nacional, podrá disponer la reinscripción de armas poseídas por particulares, además de otras medidas que impidan la circulación de armas de fuego. De esta forma, la reinscripción dispuesta por el proyecto de ley no aportaría mayormente a la normativa vigente, y haría innecesaria, por un plazo específico de seis meses, la actual facultad presidencial establecida en la ley, pero que se ejerce en el orden administrativo.

Además sería de justicia que la reinscripción, que es impuesta por la ley, esté exenta de la tasa o derechos que se establecen en el Artículo 44 del Decreto 83 del año 2008.

5. Amnistía

Este es el aspecto menos logrado del proyecto de ley. Se declara la amnistía por un plazo de seis meses, lo que resulta ser una formulación al margen del concepto de amnistía, que extingue la responsabilidad penal para siempre respecto del delito por el cual se otorga. Si se planteara mejor el proyecto, podría concluirse que el plazo de seis meses es para solicitar la amnistía, con el objeto de hacer entrega voluntaria del arma o para proceder a regularizar su inscripción. En efecto, la amnistía que se propone favorece a dos categorías de personas: los poseedores o tenedores no autorizados

LA REINSCRIPCIÓN DE ARMAS DE FUEGO ES UNA EFICIENTE MEDIDA DE FISCALIZACIÓN SIEMPRE QUE SE CUMPLAN CIERTOS PARÁMETROS DE ORDEN PRÁCTICO, COMO EVITAR LA COMPARECENCIA PERSONAL DEL TITULAR DE LA INSCRIPCIÓN Y, EN CAMBIO, PERMITIR LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL.

de armas inscritas y a los poseedores o tenedores de armas no inscritas. Pero el proyecto no indica en forma precisa y taxativa los delitos por los cuales se otorga el beneficio de la amnistía, solo se refiere “en especial” a los artículos 5°, 9° y 11 de la Ley de Control de Armas², esto es, tener un arma de fuego no inscrita o que hubiere sido trasladada, sin autorización, a un lugar distinto del declarado al momento de inscribirla; a poseer, sin autorización, explosivos, municiones o elementos químicos que sirvan de base para su fabricación, y el porte de arma de fuego sin autorización. Pero también podrían quedar comprendidos en la amnistía otras figuras delictivas, que cabría precisar cabalmente.

Por otra parte, de las varias autorizaciones que se exigen a lo largo de la Ley de Control de Armas, no queda claro cuáles de ellas, cuya omisión se sanciona, estarían comprendidas en la amnistía propuesta.

6. Conclusiones Finales

Sin perjuicio que la actualización de los registros sea un primer paso para contar con la información necesaria y así evitar el uso de armas inscritas para fines delictuales, con este proyecto de ley solo se está abarcando una parte del problema. Ni el proyecto ni el Acuerdo se hacen cargo de manera suficiente de la situación de las armas ilegales que circulan en el país. Por su parte, se echan de menos propuestas tendientes a reforzar la labor de Aduanas respecto a la entrada de armas y la labor de las policías para rastrear de manera más efectiva las ya ingresadas.

2. Ver anexo

V COMENTARIOS ESPECÍFICOS

CONTROL DE ARMAS DE FUEGO

Artículos del proyecto de ley

Artículo 29.- La Dirección General de Movilización Nacional deberá disponer de una plataforma virtual que facilitará la entrega voluntaria de armas de fuego por parte de sus poseedores o tenedores inscritos y de los sucesores de éstos, si hubieren fallecido. Los contenidos y requerimientos mínimos de esta plataforma serán establecidos en el reglamento, el que deberá incluir la ubicación de las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas, de las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile en que se podrá hacer dicha entrega.

Quien quisiere realizar la entrega prevista en el inciso anterior, deberá ingresar en la plataforma virtual su identificación completa incluyendo su dirección, acompañar un archivo de imagen con su cédula de identidad y el número de inscripción del arma. De igual forma deberá indicar el lugar en que se hará la entrega del arma de fuego.

Comentarios u observaciones

Respecto de los lugares donde se puede efectuar la entrega de las armas, debe tenerse presente que el artículo 17 de Reglamento de la Ley N° 17.798 establece, de Arica a Puerto Williams, las autoridades fiscalizadoras. Es importante este dato porque de ello depende la facilidad con que pueda actuar quien decida entregar su arma. Se entiende que la plataforma virtual debería contener esta información completa, a lo cual habrá que agregar lo correspondiente a Carabineros e Investigaciones.

Respecto del número de inscripción del arma, no queda claro si deberá ser simplemente anotado en la plataforma o si debería ser objeto de la imagen requerida para la cédula de identidad. Además, cabría indicar que también se podrá hacer el trámite personalmente, concurriendo a manifestar la intención de entregar el arma y posteriormente llevándola materialmente, en caso que la persona no tenga acceso a un computador conectado a internet.

Artículos del proyecto de ley	Comentarios u observaciones
<p>Si la devolución la fuere a realizar el sucesor del poseedor o tenedor inscrito que hubiere fallecido, deberá acompañar el respectivo certificado de defunción y, si correspondiere, el o los documentos oficiales que permitan acreditar parentesco o el título en virtud del cual se sucede.</p>	<p>Esta norma no agota suficientemente la documentación requerida, lo que correspondería precisar en el reglamento que se dictará.</p>
<p>Ingresada la información del arma de fuego y la unidad en que se hará la entrega, esta plataforma emitirá una guía de libre tránsito, que tendrá validez exclusivamente para el transporte del arma de fuego para su devolución, cuya vigencia será cinco días corridos y deberá indicar de manera visible el número de serie del arma de fuego y lugar de entrega. La autoridad mantendrá un registro de estas guías de libre tránsito, la que solicitará exhibir al momento de entrega del arma.</p>	
<p>Trascurrida la vigencia de la guía de libre tránsito prevista en el inciso anterior, el poseedor o tenedor del arma de fuego tendrá un plazo de 15 días para justificar ante la Dirección General de Movilización Nacional la circunstancia de no haber realizado la entrega. Si no lo hiciere o la autoridad contralora estimare la justificación como insuficiente, ésta oficiará a la unidad a la que hubiera correspondido su entrega instruyendo el retiro del arma de fuego, procedimiento al que serán aplicables las normas de fiscalización previstas en esta ley. Por su parte, la Dirección General de Movilización Nacional procederá a la cancelación de la inscripción del arma de fuego en el Registro Nacional de Armas.</p>	<p>Los poseedores o tenedores dispondrán de una guía de libre tránsito por 5 días par efectuar la entrega; si ello no ocurriere, tendrán 15 días para justificar esa situación ante la Dirección General de Movilización Nacional. Transcurrido este plazo sin que se presentare una justificación, procederá el retiro del arma de fuego, aplicándose las normas sobre fiscalización de la ley de control de armas.</p> <p>De acuerdo con los incisos sexto y séptimo del artículo 5° de dicha ley, "Esta diligencia [de fiscalización] sólo podrá realizarse entre las ocho y las veintidós horas y no requerirá de aviso previo.</p>

La fiscalización referida no facultará a quien la practique para ingresar al domicilio del fiscalizado.

El poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma, presumiéndose que ésta no se encuentra en el lugar autorizado, en caso de negativa de aquél a mostrarla. Si el arma no es exhibida, se lo denunciará, a fin de que se investigue la eventual comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 11 (porte de arma sin autorización) o 14 A (abandono de arma de fuego). Si el poseedor o tenedor no es habido, no podrá practicarse la fiscalización”.

Como se observa, es posible que en muchos o pocos casos se configurará la hipótesis de imposibilidad de fiscalización, y la gestión de la autoridad quedará reducida a una denuncia por eventual porte de arma sin autorización o por abandono de arma de fuego.

El inciso final señala que “Con todo, el arma de fuego cuya información hubiere sido ingresada por su poseedor o tenedor a la plataforma prevista en este artículo para su entrega voluntaria, no podrá ser vendida, cedida o enajenada de cualquier forma ni podrá cambiar la titularidad de su inscripción en el Registro Nacional de Armas”.

Esta disposición resulta innecesaria desde el momento que el inciso segundo del artículo 4° vigente, de la misma Ley, dispone que “Ninguna persona, natural o jurídica, podrá poseer o tener las armas, elementos o instalaciones indicados en el artículo 2° (armas de fuego), ni transportar, almacenar, distribuir o celebrar convenciones sobre dichas armas y elementos sin la autorización de la misma Dirección o de las autoridades a que se refiere el inciso siguiente dada en la forma que determine el reglamento. Sin embargo, tratándose de las armas y elementos establecidos en la letra a) del artículo 2° [material bélico en general], esta autorización sólo podrá ser otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional”.

Por otra parte, conforme al artículo 10 de la misma ley, los que importaren, internaren al país, exportaren, transportaren, almacenaren, distribuyeren, ofre-

cieren, adquirieren o celebraren convenciones respecto de los elementos indicados en las letras b), c), d) y e) del artículo 2º serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir de 5 años y un día a 10 años. Tratándose de armas indicadas en la letra a) del artículo 2º, la pena será de 10 años y un día a 20 años.

Nuevo artículo 30:

Artículos del proyecto de ley	Comentarios u observaciones
<p>Artículo 30°- El que falsifique una guía de libre tránsito o maliciosamente hiciere uso de una falsa, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (3 años y un día a 10 años).</p> <p>Quien utilice maliciosamente una guía de libre tránsito para justificar el porte de un arma de fuego, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años).</p>	<p>Las distintas formas como se puede falsificar un instrumento público o privado se encuentran descritas expresamente en el artículo 193 del Código Penal³. Por lo mismo, sería recomendable señalar expresamente que las posibles falsificaciones son las señaladas en el artículo 193. De lo contrario, la norma podría interpretarse en un sentido más amplio, lo que pugna contra el principio de legalidad del tipo penal.</p> <p>En cuanto a la penalidad, el proyecto establece un grado más que la pena del Código para el particular que efectúa la falsificación, que de acuerdo con el artículo 194 va de 541 días a 5 años.</p> <p>Respecto del uso de la guía falsa, el proyecto exige que sea malicioso, es decir, que se obre a sabiendas</p>

3. Artículo 193.- Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad:
- 1.º Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica.
 - 2.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido.
 - 3.º Atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.
 - 4.º Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales.
 - 5.º Alterando las fechas verdaderas.
 - 6.º Haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido.
 - 7.º Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original.
 - 8.º Ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento oficial.

o, como se sostiene generalmente, mediante dolo directo. Ello significa que se comete este delito solo si el hechor tiene conocimiento de que está haciendo uso de un documento falso.

Respecto de la penalidad por el uso, el proyecto mantiene el máximo de la pena asignada en el Código Penal, esto es, 5 años; pero respecto del mínimo, mientras el Código inicia la penalidad en 541 días (artículo 194⁴), el proyecto sanciona con presidio de 3 años y un día a 5 años, es decir, el mínimo viene aumentado en un grado.

Artículos 33 y 34:

Artículos del proyecto de ley	Comentarios u observaciones
<p>Artículo 33°- La Dirección General de Movilización Nacional deberá entregar al Ministerio Público, en formato digital y con una periodicidad trimestral, un listado actualizado y detallado de las armas de fuego que comprendiere el registro de armas de fuego, que se hayan entregado voluntariamente, en la forma que disponga el reglamento.</p>	<p>Estos dos artículos establecen una interesante medida relativa a la persecución de delitos que se hubieren cometido mediante el uso de armas de fuego.</p> <p>Las armas entregadas voluntariamente serán objeto de una pericia o registro de las huellas que quedan en los proyectiles al ser disparados, así como en las vainas. Es decir, se almacenan las señales de las imágenes identificativas de proyectiles disparados y vainas percutidas en armas de fuego originales. Ello permite que, si en una posterior investigación criminal se encuentra un proyectil o una vaina, será posible establecer la identificación del arma con que se efectuó el disparo.</p>

4. Artículo 194.- El particular que cometiere en documento público o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.

Se trata de una medida relevante para la investigación criminal, ya que, si alguna de las armas voluntariamente entregadas participó en un hecho delictivo, el procedimiento antes descrito podría individualizarla, así como a quien efectuó el disparo.

Artículo 34°.- Previa destrucción de aquellas armas de fuego que se encuentren operativas y que hubieren sido incautadas, retiradas o recibidas por la autoridad de conformidad a las leyes, deberán ser sometidas a registro de ADN balístico e ingresadas a una base de datos IBIS u análoga, en la forma en que se establecerá en el reglamento”.

El problema que presenta esta norma, en relación con la precedente, es que con ella se da aviso a los delincuentes que por propia voluntad entregaren un arma que si dicha arma fue utilizada para la comisión de un delito, el sistema podrá premunir a la Fiscalía de un medio de investigación, adicional a otros de que dispusiere el fiscal.

Si bien es muy poco probable que los delincuentes decidan entregar voluntariamente sus armas, al conocer de las normas recién transcritas (y suelen estar bien informados al respecto) sabrán el riesgo que corren al entregar voluntariamente el arma. Recuérdese que el procedimiento para la entrega voluntaria requiere de inscripción en una plataforma virtual donde se indica, entre otros, la individualización completa del que hace entrega del arma. Distinto el caso de la amnistía (artículo 4° transitorio), en que la inscripción solo se refiere al arma, manteniéndose en el anonimato al que pretende beneficiarse con la amnistía.

La pregunta que naturalmente surge es la siguiente: ¿es necesario que esta medida técnica de investigación conste en normas de rango legal, publicadas en el Diario Oficial y de público conocimiento? Es probable que esta materia pudiera coordinarse solo mediante instrucciones internas.

Artículo 3° transitorio: reinscripción

Artículos del proyecto de ley	Comentarios u observaciones
<p>Artículo 3° transitorio.- Dentro de los seis meses contados desde la publicación en el Diario Oficial de las modificaciones al reglamento que hace referencia el artículo 2° transitorio, todos los poseedores o tenedores inscritos en el Registro Nacional de Inscripción de Armas, deberán reinscribir sus armas de fuego. Para tal efecto, deberán realizar todos aquellos trámites necesarios para la inscripción de un arma de fuego y deberán declarar el estado actual del arma, con exclusión de la regularización técnica de aptitud de disparo del arma de fuego y la evaluación que acredita la aptitud física o psíquica del tenedor o poseedor del arma de fuego.</p>	<p>El mensaje presidencial señala que “al primer cuatrimestre del presente año, de las 753.619 armas inscritas activas, 25.980 se encuentran extraviadas, 21.113 han sido robadas, 471 han sido hurtadas y un total de 186.448 se encuentran asociadas a personas fallecidas. Es decir, existe un porcentaje relevante de armas de fuego las que a pesar de encontrarse en el Registro Nacional de Armas de Fuego, objetivamente no se conoce su paradero actual, lo que dificulta e impide cualquier mecanismo de prevención para su uso en delitos”.</p> <p>El texto transcrito sirve de fundamento para la obligación de reinscribir. Para cumplir esta obligación se otorgan seis meses; un cálculo aproximado indica que en dichos seis meses existen 120 días hábiles; ahora bien, si dividimos las 750.000 armas por 120, tenemos que el proceso de reinscripción requeriría atender poco más de 6.000 reinscripciones diarias. Es cierto que habrá varios puntos, a nivel nacional, donde se realice la reinscripción, pero aún así, faltan antecedentes sobre cuántos lugares habrá disponibles para estimar que la medida es viable en la práctica. Cuestión similar al caso de la entrega voluntaria, que al parecer, operará en los mismos puntos de control.</p> <p>Por otra parte, el proyecto hace bien en eximir a quien reinscriba del examen práctico del arma y del examen psicológico o psiquiátrico, porque en este caso sería imposible hacer pericias sobre todas las armas y contar con un número suficiente de psicólogos o médicos (y con tiempo suficiente para efectuar los exámenes).</p> <p>Llama la atención que el proyecto no disponga también de la plataforma virtual para el trámite de reinscripción, y solo autorice esa plataforma para la entrega voluntaria y para el caso de la amnistía. Si se</p>

dispusiera de un formulario adecuado, la reinscripción podría efectuarse digitalmente e incluso adjuntarse un archivo con la respectiva imagen y número de serie. Sólo quienes no dispusieran de equipos computacionales deberían concurrir personalmente al trámite de reinscripción. También podría sugerirse que el plazo respectivo fuera superior a los seis meses.

Artículo 4° transitorio: amnistía

Artículos del proyecto de Ley	Comentarios u observaciones
<p>Artículo 4° transitorio.- Declárase la amnistía por un plazo de seis meses, a contar de la publicación en el Diario Oficial de las modificaciones al reglamento que hace referencia el artículo 2° transitorio, para todos quienes tengan o posean armas de fuego y las presenten a las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas, a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile para su inscripción o entrega, según corresponda, de conformidad a las reglas establecidas en los incisos siguientes.</p>	<p>La amnistía es un modo de extinguir la responsabilidad penal por la cual desaparece por completo la pena y todos sus efectos (artículo 93 N° 3 del Código Penal). Es como si no se hubiera delinuido. De ahí que la expresión “amnistía por un plazo de seis meses”, que emplea el proyecto, no tenga un sentido acorde con el concepto de amnistía. Al parecer y poniendo atención al contexto, lo que se propone es un plazo de seis meses durante el cual se podrán entregar las armas o regularizarlas, y quienes cumplan con las obligaciones que, además impone este artículo, dentro de dicho plazo, quedarán exentos de toda sanción por delitos relativos a la tenencia o porte de arma en forma ilegal.</p> <p>Sin embargo, cuando se establece una amnistía, se deben señalar circunstanciadamente los delitos por los cuales se otorga, lo que el proyecto no hace, pero se puede deducir, por lo expuesto en el inciso sexto, que se trataría de los delitos contemplados “en especial” en los artículos 5°, 9° y 11 de la Ley de Control de Armas, que se transcriben en un Anexo. Aún así, y dada la redacción de dicho inciso sexto, cabe la posibilidad de incluir otros delitos no especificados expresamente en el proyecto de ley.</p>

Esta amnistía será aplicable a los poseedores o tenedores no autorizados de armas de fuego inscritas en el Registro Nacional de Inscripción de Armas y a los poseedores o tenedores de armas de fuego no inscritas en dicho registro, con el fin de que puedan realizar la entrega voluntaria de estas armas o solicitar la inscripción a su nombre.

Este inciso segundo señala como beneficiarios de la “amnistía” a los poseedores o tenedores de armas de fuego en alguna de las dos siguientes situaciones: a) los que tienen un arma de fuego inscrita pero que no cuentan con autorización; y b) los que tienen armas de fuego no inscritas.

Lo que cabría precisar, no necesariamente en el texto del proyecto pero sí como antecedente para legislar, es de qué autorizaciones se trata en la letra a), toda vez que se trata de armas inscritas (lo que parece ser regular) pero sin autorización.

Son muchas las autorizaciones que a lo largo de la ley y del reglamento se exigen para diversos propósitos. Una muy importante y que pareciera tener relación con la amnistía que se viene otorgando, es la requerida para fabricar armas o para importarlas. Esto da lugar a las armas hechas y a las introducidas ilegalmente, las cuales, sin embargo, no podrían encontrarse inscritas. También podría pensarse en armas inscritas cuyo poseedor o tenedor no contara con autorización de traslado del arma, y la hubiera cambiado de domicilio sin autorización o aviso a la autoridad, o la hubiere portado sin el permiso correspondiente, casos en los cuales, si no fueron sorprendidos *in fraganti*, no se pudo cursar la denuncia; se trataría de amnistiar ese delito no denunciado.

Correspondería que durante la tramitación legislativa, se informara a qué hipótesis delictuales se refiere la amnistía cuando se habla de armas inscritas pero que no cuenten con autorización.

Las armas de la letra b) son simplemente las que no se encuentran inscritas, caso en el cual su poseedor o tenedor ha incurrido en el delito previsto y sancionado en el artículo 9°, que sanciona la posesión o tenencia de armas sin cumplir con el trámite de inscripción.

Sólo podrán solicitar la inscripción a su nombre quienes cumplieren con los requisitos exigidos en el artículo 5° A del Decreto Supremo N° 400, de 2015, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°17.798 sobre Control de Armas y, en el caso de armas de fuego ya inscritas en el Registro Nacional de Inscripción de Armas, respecto de aquellas que no hubieran sido previamente declaradas como robadas, hurtadas o extraviadas. En todo caso, se requerirá la realización de la respectiva regularización técnica de aptitud de disparo de las armas de fuego.

Conforme al artículo 5° A, los requisitos exigidos son, en síntesis, los siguientes:

- ser mayor de edad;
- tener domicilio conocido;
- presentar certificado de antecedentes de no haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva (esto es, igual o superior a 3 años y un día);
- no haber sido sancionado por violencia intrafamiliar;
- no estar formalizado o haber sido objeto de un dictamen por el fiscal militar;
- no encontrarse afecto a una medida cautelar que impida la tenencia, posesión o porte de armas de fuego;
- no habersele cancelado la inscripción de un arma de fuego dentro de los cinco años anteriores a la solicitud de reinscripción;
- conocimientos sobre conservación y manejo del arma;
- aptitud física y psíquica compatible con el uso del arma.

Respecto de este último requisito cabe señalar que, para el caso de la reinscripción (artículo 3° transitorio) no es exigible; aunque respecto de la amnistía no se exige ni se exime expresamente, pero al referirse al artículo 5° A, en forma genérica, debe entenderse que dicha aptitud (y el correspondiente examen) forma parte de las exigencias. Obviamente, cuando la amnistía se aplica al que hace entrega voluntaria del arma, no tiene sentido indagar su aptitud física o psíquica; pero tratándose del que va a inscribir, haría falta precisar si es o no un requisito exigible esta aptitud. Con todo, es una materia opinable por tratarse de un procedimiento de excepción, ya que, si el examen fuera exigible, se podría producir atochamiento en el trámite de inscripción.

En la plataforma virtual señalada en esta ley se deberán ingresar de manera previa y anónima, los datos del arma y el lugar en que se realizará la entrega o nueva inscripción del arma de fuego. Esta información incluirá el tipo de arma, marca, modelo y número de serie o la circunstancia de encontrarse borrado o ilegible. Asimismo, la plataforma deberá permitir incorporar un archivo de imagen del arma de fuego.

El anonimato pareciera esencial al trámite de declarar un arma para los efectos de la amnistía, dada la forma como ésta ha sido concebida. Sin embargo, si de veras se otorgare una amnistía técnicamente bien formulada, ninguna importancia tendría conocer la individualización de la persona amnistiada, pues no se le podría acusar ni condenar, precisamente, por haber sido beneficiado con la amnistía. Nada obsta a que la amnistía se otorgue en forma circunstanciada y personalizada.

Ingresada la información del arma de fuego en la plataforma, ésta emitirá una autorización de tránsito para su transporte exclusivamente para estos fines, la que tendrá una vigencia de 48 horas y deberá indicar de manera visible el lugar de entrega. Si no se entregare o realizare la nueva inscripción del arma dentro de este plazo, no se entregarán nuevas autorizaciones de tránsito respecto de dichas armas.

De este artículo puede deducirse que la “amnistía” se refiere, en todo caso, a la autorización para el transporte del arma de fuego para su entrega o inscripción. Ello no constituye técnicamente una amnistía.

Vencido el plazo de 48 horas, las personas que no hubieran realizado la reinscripción, la inscripción o la entrega de armas de fuego, no contarán con la autorización para su tenencia, posesión o porte, para efectos de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 400 de 2015, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, en especial respecto de los artículos 5°, 9° y 11.

En este inciso se alude a los delitos de los artículos 5°, 9° y 11, que se transcriben en el Anexo. Pero la norma hace referencia especialmente a dichos artículos, lo que abre la posibilidad de que también otros delitos, no especialmente descritos en otros artículos, resulten también amnistiados. Cabría que se precisara esta parte de la normativa propuesta.

En virtud de esta amnistía, los poseedores o tenedores de estas armas de fuego, mientras realicen los trámites respectivos para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, gozarán de las siguientes garantías:

- a) No podrán ejercerse en su contra acciones penales o administrativas, según sea el caso, por la tenencia, posesión o porte de estas armas de fuego.
- b) La autoridad correspondiente le otorgará una constancia, que deberá señalar detalladamente el día, hora y lugar de entrega, así como la identificación de quien reciba de su parte el arma y otro funcionario de la misma institución, quien hará las veces de ministro de fe.

Las garantías que se otorgan en las letras a) y b) de este inciso final son ciertamente necesarias para lograr que las personas entreguen sus armas o las inscriban, según corresponda; pero dichas garantías, por necesarias que sean, no constituyen jurídicamente una amnistía, sino un permiso transitorio y precario para portar el arma a objeto de su entrega ante la autoridad o para recabar su inscripción. Ello parecería beneficiar también a algunos ilícitos no comprendidos en el porte no autorizado de arma de fuego, que en todo caso, cabría detallar.

VI HIPERVÍNCULO AL PROYECTO DE LEY

CONTROL DE
ARMAS DE FUEGO

El proyecto puede verse en el siguiente hiper vínculo:

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12744&prmBoletin=12229-02

VII ANEXO

CONTROL DE ARMAS DE FUEGO

ANEXO: ARTÍCULOS 5°, 9° Y 11 DE LA LEY DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO:

ARTICULO 5°.- Toda arma de fuego que no sea de las señaladas en el artículo 3° deberá ser inscrita a nombre de su poseedor o tenedor ante las autoridades indicadas en el artículo anterior. En el caso de las personas naturales, la autoridad competente será la que corresponda a la residencia del interesado, y en el caso de las personas jurídicas, la del lugar en que se guarden las armas.

La Dirección General de Movilización Nacional llevará un Registro Nacional de las inscripciones de armas.

La inscripción sólo autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el arma en el bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo o al lugar que se pretende proteger. Todo cambio del lugar autorizado deberá ser comunicado por el poseedor o tenedor de un arma inscrita a la autoridad fiscalizadora correspondiente.

Las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando, a su juicio, su poseedor o tenedor sea persona que, por sus antecedentes, hagapresumir que cumplirá lo prescrito en el inciso anterior.

El cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero podrá ser verificado exclusivamente por las autoridades fiscalizadoras a que se refiere el artículo 1° de esta ley, dentro de su respectiva jurisdicción, y por los funcionarios de Carabineros de Chile, quienes deberán exhibir una orden escrita expedida por el Comisario a cuya jurisdicción corresponda el lugar autorizado para mantener el arma.

Esta diligencia sólo podrá realizarse entre las ocho y las veintidós horas y no requerirá de aviso previo. La fiscalización referida no facultará a quien la practique para ingresar al domicilio del fiscalizado.

El poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma, presumiéndose que ésta no se encuentra en el lugar autorizado, en caso de negativa de aquél a mostrarla. Si el arma no es exhibida, se lo denunciará, a fin de que se investigue la eventual comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 11 o 14 A. Si el poseedor o tenedor no es habido, no podrá practicarse la fiscalización.

Sin perjuicio de lo anterior, si el poseedor o tenedor se ausentare del lugar autorizado para mantener el arma, podrá depositarla, por razones de seguridad, ante la autoridad contralora de su domicilio, la que, en la forma que disponga el reglamento, emitirá una guía de libre tránsito para su transporte, guarda y depósito.

Asimismo, el poseedor o tenedor, previa solicitud fundada, será autorizado para transportar el arma de fuego al lugar que indique y mantenerla allí hasta por un plazo de sesenta días. La autorización deberá señalarlos días específicos en que el arma podrá transportarse. Esta autorización será especialmente necesaria para llevar el arma de fuego a reparación, a evaluación ante el Banco de Pruebas de Chile y para las pruebas de tiro que sean necesarias para efectos de lo preceptuado en la letra c) del inciso primero del artículo 5° A y el inciso cuarto de la misma disposición. En caso de que el poseedor o tenedor, por cualquier circunstancia, requiera transportar el arma de fuego en día distinto del señalado en la autorización, podrá solicitar, por una sola vez, un permiso especial a la autoridad contralora correspondiente. Las solicitudes de transporte y libre tránsito a que hacen referencia los incisos precedentes podrán presentarse y concederse preferentemente por medios electrónicos, en la forma que determine el reglamento.

Las personas que al momento de inscribir un arma ante la autoridad fiscalizadora, se acrediten como deportistas o cazadores tendrán derecho, en el mismo acto, a obtener un permiso para transportar las armas y municiones autorizadas que utilicen con esas finalidades.

El permiso antes señalado se otorgará por un período de dos años y no autorizará a transportar las armas cargadas en la vía pública.

El transporte a que se refiere este artículo no constituirá porte de armas para los efectos del artículo 6° [Este artículo exige autorización especial]. En caso de fallecimiento de un poseedor o tenedor de arma de fuego inscrita, el heredero, legatario o la persona que tenga la custodia de ésta u ocupe el inmueble en el que el causante estaba autorizado para mantenerla, o aquél en que efectivamente ella se encuentre, deberá comunicar a la autoridad contralora la circunstancia del fallecimiento y la individualización del heredero, legatario o persona que, bajo su responsabilidad, tendrá la posesión provisoria de dicha arma y de sus municiones hasta que sea adjudicada, cedida o transferida a una persona que cumpla con los requisitos para inscribir el arma a su nombre. Si la adjudicación, cesión o transferencia no se hubiere efectuado dentro del plazo de noventa días, contado a partir de la fecha del fallecimiento, el poseedor tendrá la obligación de entregar el arma y sus municiones en una comandancia de guarnición de las Fuerzas Armadas o en una comisaría, subcomisaría o tenencia de Carabineros de Chile. La autoridad contralora procederá a efectuar la entrega a quien exhiba la inscripción, a su nombre, del arma de fuego depositada. La infracción de lo establecido en esta norma será sancionada con multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. La posesión provisoria antes señalada no permitirá el uso del arma ni de sus municiones.

La Dirección General de Movilización Nacional deberá requerir al Servicio de Registro Civil e Identificación, con una periodicidad al menos trimestral, La información correspondiente a las personas cuyas Defunciones hubieren sido registradas durante el trimestre Inmediatamente anterior por dicho Servicio, con el objeto de llevar a cabo las actuaciones que sean conducentes para regularizar, si fuere necesario, la posesión e inscripción de la o las armas inscritas a nombre de las personas cuya defunción se haya informado.

Artículo 9°.- Los que poseyeren, tuvieran o portaren algunas de las armas o elementos señalados en las letras b) y d) del artículo 2°, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4°, o sin la inscripción establecida en el artículo 5°, serán sancionados con presidio menor en su grado máximo.

Los que poseyeren, tuvieran o portaren algunas de las armas o elementos señalados en las letras c) y e) del artículo 2°, sin las autorizaciones a que se refiere el artículo 4°, o sin la inscripción establecida en el artículo 5°, serán sancionados con presidio menor en su grado medio.

Artículo 11.- Los que teniendo el permiso para su posesión o tenencia, portaren o trasladaren armas de fuego de las señaladas en la letra b) del artículo 2° fuera de los lugares autorizados para su posesión o tenencia y sin alguno de los permisos establecidos en los artículos 5° y 6° serán sancionados con una multa administrativa de 7 a 11 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la sanción será la cancelación del permiso. Cancelado el permiso, el sancionado tendrá cinco días hábiles para entregar las armas respectivas a la Dirección General de Movilización Nacional, la que las destruirá. Transcurrido ese plazo sin haberse entregado las armas, su posesión, porte o tenencia se considerarán ilegales y serán sancionados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de esta ley.